



Pablo Lago, Carmen Crespo, María González Corral y Enrique Cabero durante la mesa de debate del club de prensa. PHOTOGENIC

Carmen Crespo: «La soberanía alimentaria es el mayor arma de defensa de un país»

La europarlamentaria y ponente del informe de iniciativa de la PAC exige al Gobierno el «bloqueo» en Europa de la nueva Política Agraria Común, que castiga a Castilla y León con un recorte de mil millones

A. VILLARES VALLADOLID
La nueva PAC y su recorte para la agricultura y la ganadería de Castilla y León centró el debate del Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León celebrado en Valladolid. En el mismo, dialogaron la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero; y Carmen Crespo, la ponente del informe de iniciativa sobre la PAC post 2027 en el Parlamento Europeo, en una mesa moderada por Pablo Lago, director de este periódico.

En el encuentro, se estableció un mensaje nítido y compartido: preservar la arquitectura de dos pilares de la PAC con un presupuesto «sólido», oponerse al modelo de «pilar único» de la Comisión y activar, si es preciso, el «bloqueo» en el Consejo. Crespo lo formuló sin rodeos: «No me basta con que digan que no nos gusta, si esto es así,

se bloquea», reclamando al Gobierno de España que pronuncie esa palabra desde el inicio de la negociación, porque no es un asunto sectorial: «Somos comercio, somos industria, somos transporte, somos empleo». Durante su intervención, la europarlamentaria también destacó que «la soberanía alimentaria es el mayor arma de defensa de un país».

En la última propuesta de la Comisión Europea ante el próximo periodo de la PAC 2028/2034, el órgano planteó recortar 10.000 millones de euros para toda España en esos seis años, lo que se traduciría en una pérdida de alrededor de 1.000 millones de euros para los profesionales del campo de las nueve provincias de la Comunidad, un recorte que perjudicaría al sector agrario y que ha generado malestar entre los afectados, como ya avanzó este medio.

Por su parte, González Corral explicó la posición de la Junta: recha-

zo al pilar único y defensa de los dos pilares porque «es lo que ha permitido desarrollar numerosas actividades» y encaja con la realidad productiva de Castilla y León. Respaldó esa línea con una declaración institucional firmada en mayo con las OPAs, a la que se han adherido Urcacyl, la industria alimentaria (Vitartis), Ferduero y 8 de las 9 diputaciones, buscando «que todos defendamos lo mismo». Esa hoja de ruta, dijo, ya se ha llevado a Bruselas: como representante autonómica en los Consejos de Ministros del semestre, entregó la declaración al comisario Hansen, en presencia de las organizaciones profesionales agrarias.

En ese paquete de prioridades, el agua fue uno de los temas destacados a tratar: Castilla y León «fue pionera» en acuerdos con Seia-sa, con 125.000 hectáreas de regadíos modernizadas en dos décadas, y reclama que el nuevo documento europeo de «resiliencia del

agua» deje de relegar a agricultores y ganaderos del sur de Europa, quienes más la necesitan y cuidan.

La consejera amarró el porqué económico con números que pesan en la balanza nacional: de cara a los pagos del 16 de octubre, las ayudas directas —incluidas agroambientales y zonas con limitaciones— ascienden en la Comunidad «en torno a 950 millones» en pagos anuales, a los que se suman «más de 1.180 millones» en inversiones y desarrollo rural vía segundo pilar y cofinanciación estatal y autonómica del periodo 23-27. «El planteamiento de un único pilar con reducción de fondos no encaja con aquello que queremos», remarcó. Esa visión se cruza con la política hídrica: donde se ha modernizado, se ha logrado «ahorrar un 30% de agua», argumento que la Junta quiere ver reflejado en los planes hidrológicos para habilitar nuevos regadíos y aumentar capacidad de regulación en la cuenca del Duero.

Cabero encuadró la discusión en una «enmienda a la totalidad conceptual» a la orientación de la Comisión: la PAC «debe ir en otro sentido» y situar al agro en el núcleo duro de la UE, porque «no es un sector subsidiario ni sustituible». Su esquema —rentabilidad, sostenibilidad amplia (económica, social y medioambiental) y seguridad— vertebrará la capacidad del sector para generar bienestar, progreso y seguridad alimentaria, que «es base de nuestro desarrollo y de nuestra política de seguridad». De ahí la advertencia: «Sin rentabilidad no puede haber actividad»; la cadena de valor —precios de materias primas, materiales, combustible— debe estar equilibrada para sostener la empresa agraria profesional que, en Castilla y León, ha protagonizado una modernización tecnológica sin precedentes. El CES respalda, además, la declaración de mayo y la posición fijada por el Parlamento Europeo en septiem-

CLAVES DE LA PAC
MAS ALLÁ DEL 2027NOS
IMPULSAJunta de
Castilla y LeónCAJA RURAL
DE ZAMORAClub de Prensa
EL MUNDO
DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN



MARÍA GONZÁLEZ CORRAL CONSEJERA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

«Lo que queremos es que cada vez haya más jóvenes que se dediquen a este sector»

A. VILLARES VALLADOLID Castilla y León fijó una posición sin ambages en voz de su consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral: una PAC post 2027 con un «presupuesto sólido» y el mantenimiento de los dos pilares, frente al modelo de pilar único que baraja la Comisión, porque «no encaja» con la realidad productiva y territorial de la Comunidad. La consejera puso cifras sobre la mesa para dimensionarlo que está en juego: «Las ayudas directas, donde incluimos también las agroambientales o las de montaña, las zonas de limitaciones suponen en torno a 950 millones de euros» en pagos anuales, a los que se suman «más de 1.180 millones» del segundo pilar del marco vigente (PAC 23-27). «Por eso, el planteamiento de un único pilar con reducción de fondos no encaja con aquello que queremos en Castilla y León», remarcó, en alusión a los pagos del 16 de octubre ya en curso.

Y es que esta defensa no es retórica: la Junta ha tejido desde mayo una declaración institucional con el sector que ya suscribieron las OPAs y Urcacyl —la gran plataforma de las cooperativas— y, esta misma semana, también la industria alimentaria (Vitartis) además de «administraciones y más entidades». A la de-

claración se han adherido 8 de las 9 diputaciones, con la vista puesta en que «todos tengamos una postura común» y que «administraciones, entidades y privados defendamos lo mismo». «Un presupuesto sólido, el mantenimiento de los dos pilares, que nos fijemos en los agricultores profesionales, que apostemos por el relevo generacional, por nuestra industria alimentaria y por la simplificación administrativa».

González Corral enmarcó además el proceso que viene: «Primer paso, la Comisión presenta un documento. Segundo paso, el Parlamento presenta un informe y ahora nos queda el Consejo, y el Consejo sí que tiene esa capacidad de veto». Consciente de que España «se juega» mucho, la consejera subrayó que ha llevado la posición de Castilla y León «a Bruselas» como representante de las comunidades autónomas en los Consejos de Ministros de este semestre, «entregada al comisario Hansen», con las OPAs a su lado, y que existe «una declaración conjunta» de comunidades autónomas rechazando el modelo propuesto. «Lo que queremos es que se escuche», insistió.

El agua y los regadíos ocuparon un bloque central de su argumentación, por pura lógica productiva. Recordó que Castilla y León fue «pionera» en

convenios con Seiasa para modernizar regadíos y que «en los últimos 20 años» se han modernizado «125.000 hectáreas», una cifra «muy considerable» que debe verse y escucharse en Bruselas cuando se hable de «resiliencia del agua», porque el documento comunitario «deja en

«El planteamiento de un único pilar no encaja con lo que queremos»

un segundo plano a nuestros agricultores y ganaderos» precisamente donde más falta hace, donde el recurso «es escaso y abundante quizá en periodos cortos», lo que obliga a «almacenarlo» y a garantizar estabilidad a las explotaciones.

La consejera se refirió también a la demografía agraria: «Tenemos una convocatoria abierta en la que hemos puesto 100 millones de euros» para la incorporación de jóvenes, que expira en los próximos días, acompañada de una agenda de simplificación administrativa que la Junta ha trabajado «con tres grupos de trabajo con las OPAs» para que quienes

entren lo hagan «con tranquilidad y con certidumbre». «Lo que queremos es que cada vez haya más jóvenes que se dediquen a este sector», dijo, ligándolo con el horizonte que espera de la negociación europea.

La reciprocidad comercial fue otro de los ejes. González Corral defendió «aplicar a los productos importados las mismas exigencias en fitosanitarios y bienestar animal que a los europeos» para «jugar en igualdad de condiciones» en el mercado global. «Estamos encantados de que se firmen más acuerdos y de exportar más», afirmó, «pero siempre jugando con esa garantía»; es decir, «jugar todos de la misma manera para que no compitamos con desventaja».

En esa misma clave de coherencia regulatoria, recordó que la declaración institucional de Castilla y León «incluye expresamente el compromiso de no prohibir el uso de sustancias fitosanitarias sin alternativas», y de «avanzar en investigación de semillas adaptadas al cambio climático», porque lo contrario «ahoga» al productor mientras otros países sí usan esas herramientas. También mostró sintonía con el impulso a «las técnicas genómicas» en las que trabaja la UE, por su potencial para reducir costes y aumentar resiliencia.

bre como base de una posición española influyente en el Consejo.

Crespo, por su parte, combinó una defensa política con ajustes técnicos. En lo político, reclamó «bloqueo» a la propuesta si persiste, por ser «una afrenta» a un sector vital para empleo, clima y cohesión territorial; en lo económico, destacó aspectos positivos del marco actual: «se blindan las ayudas directas», hay posibilidad de «actualizar precios» y se refuerzan «ayudas acopladas» pensando en ganadería y remolacha, con referencias a jóvenes y mujeres. Pero señaló el «gran interrogante» del segundo pilar: España recibirá 88.000 millones en un fondo único, de los que unos 37.000 (34%) quedarían blindados para directas, y el resto se mezclaría con cohesión, abriendo dudas sobre cofinanciación y sobre programas como el del vino. «¿Nos vamos a hacer competencia con Francia o Italia según el dinero que ponga cada uno?» planteó.

Convergió así las tres voces en un mismo carril: mantener dos pilares y un presupuesto suficiente, acelerar la modernización de regadíos, facilitar la incorporación de jóvenes con menos burocracia y reforzar reciprocidad y salvaguardas comerciales, mientras el Consejo encara una negociación larga en la que España —y Castilla y León por su peso agrario e industrial— aspira a marcar el paso.

CARMEN CRESPO PONENTE DEL INFORME DE LA INICIATIVA SOBRE LA PAC POST 27 EN EUROPA

«España se juega más que nadie y tiene que estar unida; queremos escuchar ya la palabra 'bloqueo'»

A. VILLARES VALLADOLID Carmen Crespo, ponente del informe de iniciativa sobre la PAC post 2027 en el Parlamento Europeo, aterrizó en Valladolid con una idea fuerza que repitió como un martillo: «No me basta con que digan que no nos gusta. No se trata de no gustar. Se trata de decirle a la Comisión: si esto es así, se bloquea». Y lo reclamó «ya» al Gobierno de España para entrar en el Consejo «desde el principio» con una postura nítida. «Es la mejor forma en estos momentos de que cambie la cosa». La razón, resumió, es que no hablamos de un «sector agrario y ganadero» aislado, sino de comercio, industria, transporte y empleo: «Es un sector básico para el futuro de nuestra sociedad».

La eurodiputada distinguió entre lo inaceptable y lo rescatable del paquete que plantea Bruselas. En el activo, marcó «cosas positivas»: «Se blindan las ayudas directas»; hay luz verde para «actualizar precios» y se refuerzan las «ayudas acopladas» pensando «en la ganadería» y «en la remolacha», junto a menciones, «de forma muy vaga,

ajóvenes y mujeres dentro de la cifra global que España recibiría. Pero ahí afloró el gran nudo: «88.000 millones en un fondo único», de los que «37.000, aproximadamente, el 34%» quedarían blindados para directas. ¿Y el resto? «Un gran interrogante: ese segundo pilar que va mezclado con los fondos de cohesión que va mezclado con toda la política que va en el bloque para que nuestro país pueda hacer lo que considere oportuno». De fondo, dudas obvias: ¿habrá capacidad de cofinanciación sin presupuestos? ¿Se abrirá una «competencia» intracomunitaria en programas como el del vino según «el dinero que ponga cada uno»? «Eso no puede ocurrir», avisó.

De ahí su exigencia política: bloqueo si la propuesta no cambia. Para Crespo no es cuestión de siglos sino de coherencia del país ante «una afrenta» a un sector que fija población, genera empleo y es clave como «sumidero de CO₂» frente al cambio climático. «España se juega más que nadie» y, por tanto, debe «estar unida» y pronunciar «ya» la palabra bloqueo «unáni-

mente» para que Europa entienda que vamos en serio, reclamó, antes de señalar que «la soberanía alimentaria de la Unión Europea es la mayor arma de defensa que puede tener una sociedad».

El agua fue otro de los temas del debate: «Equilibrar el agua no es

«Pagaremos con esta propuesta el 20% de intereses del 'Next Generation'»

una posibilidad, es una obligación». Propuso empezar por lo básico —reducir pérdidas en redes y apostar por economía circular—, y no negarse ni a embalses ni a soluciones de regulación «por razones ideológicas». «Los científicos son los que tienen que decir si se embalsa agua aquí», defendió, lamentando que España «perdió una oportunidad» con el Next Generation y emplazando a usar el BEI para financiar la infraes-

tructura que falta.

El dinero, insistió, no puede jugar contra el propio campo. Puso una cifra incómoda sobre la mesa: «Nuestro país va a pagar con la PAC, con esa propuesta, el 20% de intereses del Next Generation en el marco financiero plurianual cuando ese instrumento «no se ha utilizado ni para la agricultura, ni para la ganadería ni para el agua». Por eso, a la vez que felicitó a Castilla y León por su «magnífica labor en regadíos», pidió acelerar «declaraciones de impacto ambiental» para culminar modernizaciones «cruciales» que den competitividad.

La coherencia regulatoria, añadió, debe ser europea de verdad. «No puede haber 27 PAC», dijo, y reclamó «modificar el reglamento 1117» de fitosanitarios para que si una sustancia se autoriza —puso como ejemplo el azúcar/remolacha— su uso se armonice en todos los países y no distorsione la competencia. De lo contrario, se genera un mosaico que castiga a unos productores frente a otros dentro del mismo mercado único.

ENRIQUE CABERO PRESIDENTE DEL CESCYL

«Sin la seguridad alimentaria sabemos que no podemos ir hacia ninguna parte»

A. VILLARES VALLADOLID Castilla y León «no está hablando de cualquier sector»: el campo es estratégico y debe situarse en el núcleo duro de las decisiones europeas. Con esa premisa, Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, articuló un alegato político, económico y social en defensa de una PAC post 2027 que refuerce el papel del agro en la seguridad, el bienestar y la autonomía de la Unión. «Coincidimos plenamente con la declaración conjunta de mayo» y con la posición aprobada en el Parlamento Europeo a partir del informe de Crespo, dijo, porque «esta es una materia crucial para el CES» y para una Comunidad que es «potencia agraria y agroindustrial»; el campo «garantiza el bienestar, el progreso y la seguridad».

Su amazon conceptual arrancó con una advertencia: «Sin rentabilidad no puede haber actividad». Cabero encadenó esa idea a una revisión de toda la cadena de valor —materias primas, materiales, combustible— para que «sea rentable» producir alimentos en Europa; y una triple sostenibilidad que, a su juicio, debe dejar de ser eslogan para convertirse en criterio operativo: económica (indisoluble de la rentabilidad), so-

cial (vinculada a derechos y necesidades de la ciudadanía) y medioambiental («el sector es de los que más cuida el medioambiente»).

En esa triple base sumó una cuarta palabra que repitió a lo largo del debate: seguridad. «Debe ser un sector seguro. Un sector sin incertidumbres» que, además, empuje el segundo pilar para el desarrollo de las zonas rurales y blinde la seguri-

«La PAC tiene que ir en sentido contrario de lo que se plantea»

dad alimentaria, «una de las bases de nuestro desarrollo, de nuestro bienestar e incluso de nuestra política de seguridad». «Sin seguridad alimentaria no podemos ir a ninguna parte».

El presidente del CESCyL dibujó, además, un retrato de sector alejado de tópicos, apoyado en datos de modernización e innovación: un agro «muy profesional» que, en Castilla y León, ha hecho «el mayor esfuerzo de modernización, de tecnologización y de mejora constante de la calidad» en décadas. Por eso pidió «res-

paldar la dimensión profesional» y convertir esa profesionalidad en un requisito que atraiga inversión, talento y estabilidad regulatoria.

Desde esa mirada de largo alcance, Cabero reclamó una «enmienda a la totalidad» de la orientación con la que la Comisión ha abierto el melón de la PAC post 2027. No una enmienda técnica, sino «conceptual»: «La PAC tiene que ir en otro sentido, en el sentido contrario de lo que se está planteando». El sector agrario «no es subsidario ni sustituible»; está «en el núcleo duro de las decisiones» si Europa quiere acertar. La política agraria debe «conducir a fomentar el sector» porque es palanca de seguridad y defensa, de productividad, de autonomía estratégica, de tecnologías, de materias primas, de energía y, en suma, de un «modelo de Unión Europea más integrado y relevante».

Finalmente, también dejó un recordatorio jurídico-político que muchos olvidan: el mandato del artículo 130 de la Constitución de 1978 para atender de forma especial a agricultura, ganadería, pesca, artesanía y zonas de montaña. La defensa del sector, por tanto, no es un capricho ni una concesión corporativa; responde a una obligación democrática y europea.

CIPRIANO GARCÍA DIRECTOR GRAL. DE CAJA RURAL DE ZAMORA

«Debemos reivindicar una PAC que sea justa, estable y adaptada a la realidad del territorio»



Cipriano García. PHOTOGENIC

«El futuro de la PAC es también el futuro de nuestras gentes»

A. VILLARES VALLADOLID Con un mensaje directo y de raíz, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, abrió ayer el club de prensa de El Mundo de Castilla y León dedicado a las claves de la Política Agrícola Común más allá de 2027. Lo hizo defendiendo «una PAC justa, estable y adaptada a la realidad del territorio», al tiempo que recordó el peso del campo en la Comunidad: «Más de 60.000 explotaciones y más de cinco millones de hectáreas acogidas al sistema de ayudas», más del 20% del total nacional, un soporte «que fija población, mantiene servicios, genera empleo y permite a los jóvenes ver futuro en su tierra».

García abrió su intervención con un saludo institucional a las autoridades y agentes del sector y agradeció la convocatoria de «una cita oportuna y necesaria» para analizar los retos de la PAC post 2027. «El futuro de la PAC es también el futuro de nuestras gentes, de nuestros pueblos y de una parte esencial de la economía y la identidad de esta Comunidad», afirmó, subrayando el papel vertebrador que las ayudas europeas han desempeñado «desde hace décadas» en el campo castellano y leonés.

El director general enfatizó

que el impacto de la PAC «no se mide solo en cifras»: se traduce en cohesión territorial y servicios en los pueblos, en empleo y en relevo generacional. Por ello reclamó «una PAC que sea justa, estable y adaptada a la realidad del territorio», que reconozca y premie «la producción sostenible» sin perder de vista la base económica de cada explotación. «Hoy, más que nunca, debemos reivindicar una PAC que valore el esfuerzo de quienes, día tras día, cuidan del campo y alimentan al país», añadió.

En ese marco, reivindicó la función de la banca de proximidad. «En Caja Rural de Zamora llevamos más de 100 años siendo parte de ese esfuerzo», recordó, para ligar el devenir del sector a la disponibilidad de financiación, asesoramiento y acompañamiento. «Seguimos abriendo oficinas donde otros cierran, porque creemos que la cercanía y el trato amistoso son insustituibles», incidió, antes de situar la red de la entidad en Zamora, León, Valladolid, Ourense y Madrid, «con más de un centenar de puntos de atención» orientados a agricultores, ganaderos, cooperativas, autónomos y familias. «Nuestra presencia no es solo física: es emocional, es compromiso, es confianza. Estar cerca no es una estrategia, es una convicción».

«En Caja Rural de Zamora nos sentimos orgullosos de ser rurales, de ser la banca local de Castilla y León, de estar donde otros no están, y de seguir trabajando por una comunidad viva, cohesionada y próspera», aseguró, antes de formular una invitación al trabajo colectivo en el debate sobre la próxima reforma: «Que esta jornada sirva para escuchar, debatir y sumar esfuerzos, porque el futuro del campo es el futuro de todos».



Jorge Llorente, viceconsejero de Política Agraria y Comunitaria y Desarrollo Rural; Francisco Vázquez, vicepresidente de las Cortes de Castilla y León; Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid; Adriana Ulibarri, editora de El Mundo de Castilla y León; Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid; Raúl de la Hoz, eurodiputado; y Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora. PHOTOGENIC